

PRECIOS Y PUNTO DE SUSCRIPCIÓN

Trimestre	15 pesetas.
Semestre	30 —
Anual	60 —

Las suscripciones se solicitarán de la *Inspección de Talleres del Hogar Pignatelli*, calle Pignatelli, 87.

Las de fuera podrán hacerse remitiendo el importe por giro postal u otro medio.

Todos los pagos se verificarán en la Depositaria de fondos provinciales (Diputación Provincial).

Los números que se reclamen después de transcurridos cuatro días desde su publicación sólo se servirán al precio de venta, o sea a 50 céntimos los del año corriente; 0'75 ptas., los del año anterior, y de otros años, una peseta.



PRECIOS DE LOS ANUNCIOS

Por cada línea o fracción que ocupe cada anuncio o documento que se inserte, 1'50 pesetas. Al original acompañará un sello móvil de UNA peseta por cada inserción.

Los derechos de publicación de números extraordinarios y suplementos serán convencionales de acuerdo con la entidad o particular que lo interese.

Los anuncios obligados al pago, sólo se insertarán previo abono o cuando haya persona en la capital que responda de éste.

Las inserciones se solicitarán del Excmo. Sr. Gobernador, por oficio, exceptuándose, según está prevenido, las de la primera Autoridad militar.

A todo recibo de anuncio acompañará un ejemplar del BOLETÍN respectivo como comprobante, siendo de pago los demás que se pidan.

Tampoco tienen derecho más que a un solo ejemplar, que se solicitará en el oficio de remisión del original, los Centros oficiales.

El BOLETÍN OFICIAL se halla de venta en la imprenta del *Hogar Pignatelli*.

BOLETIN OFICIAL

DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA

ESTE PERIÓDICO SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS, EXCEPTO LOS DOMINGOS

Inmediatamente que los señores Alcaldes y Secretarios reciban este BOLETÍN OFICIAL, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo del siguiente.

Los Sres. Secretarios cuidarán, bajo su más estrecha responsabilidad, de conservar los números de este BOLETÍN, coleccionados ordenadamente para su encuadernación, que deberá verificarse al final de cada semestre.

Las leyes obligan en la Península, islas adyacentes, Canarias y territorios de Africa sujetos a la legislación peninsular, a los veinte días de su promulgación, si en ellas no se dispusiese otra cosa. (Código civil).

Las disposiciones del Gobierno son obligatorias para la capital de provincia desde que se publican oficialmente en ella, y desde cuatro días después para los demás pueblos de la misma provincia. (Ley 24 de noviembre de 1837).

GOBIERNO DE LA NACION

Ministerio de Organización y Acción Sindical.

DECRETO

La actual jurisdicción de trabajo funciona de modo anormal, y está atribuida, en gran parte, a organismos de composición paritaria, cuya competencia no se circunscribe a la materia contenciosa, sino que se extiende a otras de las que no debiera entender. Las deficiencias de que adolece el sistema y el ser contrario a los principios que informan el movimiento exige su inmediata reforma, en espera de una ordenación definitiva, sólo posible cuando se establezca la organización sindical.

Por ello, previa deliberación del Consejo de Ministros, y a propuesta del de Organización y Acción Sindical, dispongo:

Artículo 1.º Se suprimen los Jurados Mixtos de Trabajo y los Tribunales Industriales. La competencia atribuida a unos y otros se confiere a las Magistraturas de Trabajo que por este Decreto se crean.

Para aquella demarcación territorial en que no se designe Magistrado de Trabajo serán ejercidas sus funciones por los Jueces de primera instancia, los cuales actuarán entonces "en funciones de Magistrados de Trabajo", y lo harán constar así en las diligencias correspondientes.

Artículo 2.º El conocimiento de los asuntos que se atribuyen a los Magistrados de Trabajo se ajustará a las normas procesales señaladas en

el actual Código de Trabajo, cuando el Tribunal Industrial funciona sin Jurado, con las siguientes modificaciones:

La celebración del acto del juicio tendrá lugar en única convocatoria el mismo día de la conciliación sin avenencia, debiendo hacerse a este efecto la citación en forma para ambos fines, sin que pueda suspenderse por falta de asistencia de las partes. En las cédulas de citación se hará constar esta circunstancia, así como que los litigantes han de concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse.

Ambos actos deberán celebrarse en el mismo día y dentro de los diez siguientes al de la presentación de la demanda.

Sólo a petición de ambas partes o por causas suficientemente acreditativas, a juicio del Magistrado, podrá suspenderse la celebración de los actos, señalándose para nuevo día, dentro de los diez hábiles que sigan a la fecha de suspensión.

Si el actor intentase asistir al juicio, dirigido por Letrado o representado por Procurador, lo hará constar necesariamente en la demanda; asimismo el demandado pondrá esta circunstancia en conocimiento del Tribunal, por escrito, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al recibir la citación para el juicio, para que, puesto en conocimiento del actor, pueda solicitar en otro plazo igual la designación de Abogado en el turno de oficio, sin que por este motivo se detenga el curso del expediente.

La falta de cumplimiento de estas reglas implica en las partes la renuncia al derecho de emplear Abogado y Procurador en su defensa y representación. Podrá el Magistrado de Trabajo, si lo estima procedente, oír el dictamen de tres personas expertas en la cuestión objeto del plei-

to, en el momento del acto del juicio, o terminado éste, para mejor proveer.

A este fin, solicitará del Delegado Jefe de la Central Nacional Sindicalista de la provincia que le proponga los nombres de las personas que juzgue aptas para asesorarle; en dicha comunicación, el Magistrado señalará la materia o modalidad de trabajo sobre que ha de versar el dictamen. El expresado Delegado sindical, en término de cuarenta y ocho horas, deberá remitir al Magistrado una lista de nueve personas a quienes, por su honorabilidad y competencia, juzgue aptas para el indicado cometido.

Al hacer la propuesta, el Delegado sindical procurará que en la lista haya la debida proporción entre los elementos de la producción que conocen de la materia o modalidad de trabajo sobre que haya de versar el dictamen, e indicará la profesión u oficio de cada uno de los que propone. El Magistrado escogerá libremente entre ellos y hará la designación.

A los asesores se les abonarán los gastos de locomoción, caso de que se les obligue a desplazarse de su localidad, y si son trabajadores cobrarán además unas dietas de cuantía igual a las retribuciones que dejaran de percibir.

La función asesora ante la Magistratura del Trabajo será considerada como acto de servicio obligatorio. La incomparecencia no justificada del asesor designado podrá sancionarse por el Magistrado de Trabajo con multa de 5 a 500 pesetas.

Los asesores se limitarán a responder concretamente y con la extensión que el Magistrado estime precisa a las preguntas que éste les formule, tanto respecto a los hechos como a las prácticas, usos y costumbres de observancia en la profesión de que se trate.

El Magistrado apreciará libremente el dictamen de los asesores, pudiendo recogerlo o no en la sentencia.

A requerimiento de los asesores o Magistrados, se consignará el dictamen o dictámenes por escrito, y se unirá en este caso a los autos.

Artículo 3.º Contra la sentencia dictada por los Magistrados de Trabajo o Jueces de primera instancia, en funciones de tales, sólo cabrá recurso de casación en los casos, forma y plazo previstos en el artículo 486 y siguientes del Código de Trabajo.

La tramitación de los recursos se ajustará a las normas establecidas en dicho precepto legal.

Queda subsistente el recurso extraordinario de revisión que previene el artículo 496 del Código de Trabajo.

Artículo 4.º Los Delegados de Trabajo asumirán las funciones disciplinarias, consultivas y de estadística que la ley atribuye a los Jurados Mixtos; las Inspectoras pasan a depender de los Inspectores de Trabajo.

Las funciones de los Jurados Mixtos relativas a la regulación de las condiciones generales del trabajo que se susciten en la aplicación de las leyes, bases, reglamentos o contratos de trabajo pasarán a ser de la competencia de los Delegados de Trabajo, quienes la ejercerán en la forma que en su día se establezca.

Artículo 5.º El Ministro de Organización y Acción Sindical procederá libremente a designar las personas que hayan de ejercer el cargo de Magistrado de Trabajo entre españoles mayores de edad que posean título académico y que por

su competencia y vocación sean considerados aptos para el desempeño de la función.

Esta designación se entenderá con carácter provisional, sin que suponga, en ningún caso, reconocimiento de derechos ulteriores ni categorías. En su día se establecerán las normas para la provisión definitiva de dichos cargos.

Artículo 6.º Los Secretarios, auxiliares y subalternos de los Jurados Mixtos que hubiesen obtenido o consolidado sus cargos por oposición, concurso o examen de aptitud, a su solicitud, y previa la depuración que dispone el Decreto de 5 de diciembre de 1936 y sus concordantes, pasarán a depender de los Magistrados de Trabajo, o bien de las Delegaciones de Trabajo respectivas, según la conveniencia del servicio, a cuyo efecto el Ministro de Organización y Acción Sindical dispondrá lo procedente.

Artículo 7.º Los créditos para atender a los gastos de las Magistraturas de Trabajo que se creen no podrán exceder de los actuales señalados a los Tribunales Industriales y Jurados Mixtos.

Artículo 8.º El Ministro de Organización y Acción Sindical dictará las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de los preceptos del presente Decreto.

Artículo 9.º Quedan derogadas todas las disposiciones, así generales como especiales, que se opongan a los preceptos del presente Decreto, y suprimidos los Tribunales y Comisiones que, por disposición de las Autoridades de todo orden, se hubiesen constituido para suplir las funciones de los Jurados Mixtos.

Disposición transitoria. En el plazo de quince días, contados a partir de la publicación de este Decreto, los Jurados Mixtos y Tribunales Industriales harán entrega de su archivo y documentación a los Magistrados de Trabajo o Jueces de primera instancia, en su caso, y a los Delegados Provinciales de Trabajo en lo que pase a su competencia.

Las reclamaciones que se encuentren en tramitación ante dichos organismos pasarán igualmente a los Magistrados de Trabajo o Jueces de primera instancia, los que acomodarán la sustanciación de las mismas, sin retrotraer el procedimiento, a las normas de este Decreto.

Dado en Burgos a 13 de mayo de 1938. — Segundo Año Triunfal. — Francisco Franco. — El Ministro de Organización y Acción Sindical, Pedro González Bueno.

Ministerio de Justicia.

ÓRDENES

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto de 26 de mayo de 1936, se acuerda la suspensión de las vacaciones de Tribunales correspondientes al presente año y establecidas en los artículos 892 de la ley Orgánica del Poder Judicial y 37 del Estatuto del Ministerio fiscal.

Lo que comunico a V. I. a los efectos procedentes.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Vitoria, 2 de junio de 1938. — Segundo Año Triunfal. — Tomás Domínguez Arévalo.

Ilmo. Sr. Jefe del Servicio Nacional de Justicia.

La Orden de 4 de diciembre de 1936, teniendo en cuenta la situación anormal en que se hallaban varios de los Colegios Notariales de la España Nacional, dispuso el aplazamiento de la renovación de cargos de las Juntas Directivas hasta que se acordase lo contrario con carácter general o para determinados Colegios.

Por el tiempo transcurrido sin haberse realizado la renovación reglamentaria de las expresadas Juntas y por la circunstancia de hallarse vacantes en algunas de éstas varios cargos, por defunción de los individuos que los desempeñaban o por otras causas, es conveniente proveer a la reorganización de los citados órganos rectores de los Colegios Notariales con normas de flexibilidad adecuada a las necesidades actuales, y de carácter provisional, que no prejuzgue la permanencia o la reforma del sistema electivo aceptado por el Reglamento del Notariado.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Se autoriza a la Jefatura del Servicio Nacional de los Registros y del Notariado para que, con carácter provisional y sin las limitaciones fijadas en el artículo 322 del Reglamento del Notariado designe los Notarios que hayan de desempeñar los cargos de las Juntas Directivas de los Colegios Notariales, acordando su renovación total o parcial aun en los casos en que no se haya cumplido todavía el plazo señalado en el artículo 324 de dicho Reglamento.

Vitoria, 1 de junio de 1938. — Segundo Año Triunfal. — Tomás Domínguez Arévalo.
Sr. Jefe del Servicio Nacional de los Registros y del Notariado.

Ministerio de Defensa Nacional.

JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y RECUPERACION

(Habiéndose padecido error en la publicación de la base 7.^a de la Orden ("B. O. 588), fecha 2 de junio de 1938, convocando un curso para la provisión de 150 plazas de Tenientes Auxiliares provisionales de Estado Mayor, reproducimos dicha base debidamente rectificada):

7.^a El plazo de admisión de instancias para su selección se cerrará el día 15 del mes de junio, para comenzar el curso el día 1.^o del mes de julio próximo, empleándose el tiempo que media entre ambas fechas en aviso a los alumnos admitidos e incorporación de éstos al Centro.

(Del "B. O. del E." núm. 589, de fecha 3 de junio de 1938).

SECCION SEGUNDA

Gobierno Civil de la provincia de Zaragoza.

Núm. 2.917.

REUNIONES. — Circular.

En el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia número 41 de 18 de febrero último, se publicó una circular con órdenes e instrucciones para cuantos pretendieran celebrar reuniones, manifestaciones, homenajes, certámenes literarios y otros actos culturales en que hu-

quiera de hacerse uso de la palabra en público, a fin de que con el tiempo suficiente solicitasen por conducto del Gobierno Civil, del Ministerio del Interior, la oportuna e indispensable autorización para celebrarlos.

Como parece que por algunos se ha descuidado el exacto cumplimiento de estas órdenes, he considerado oportuno recordarlas, reiterándoles que los organizadores de estos actos expresarán en sus instancias, con todo detalle, en qué han de consistir, y si se trata de homenajes, certámenes literarios, etc. Expresarán también el nombre de los oradores y asuntos de que se proponen tratar y que presentarán sus instancias en el Gobierno Civil con la antelación precisa para poder tramitarlas y que el Excmo. Sr. Ministro del Interior les conceda la autorización, debiendo tener presente que mientras ésta no les sea expresamente concedida habrán de abstenerse de anunciar, de hacer propaganda o de cursar convocatorias para el acto que intentaren celebrar.

Asimismo se recuerda a los Alcaldes que bajo su personal responsabilidad y por ningún concepto permitirán en su municipio reunión, manifestación o acto alguno de los expresados sin que sus organizadores les exhiban la correspondiente autorización ministerial, y a este efecto darán la mayor publicidad a estas instrucciones, haciendo saber que los infractores serán en su caso corregidos con toda severidad.

Zaragoza, 7 de junio de 1938. — Segundo Año Triunfal.

El Gobernador civil,

Francisco Planas de Tovar.

Núm. 2.918.

Circular.

El Ilmo. Sr. Jefe del Servicio Nacional de Abastecimientos y Transportes, por circular fecha 31 de mayo pasado, dispone lo siguiente:

1.^o Queda terminantemente prohibido que el comercio ponga a la venta ninguna mercancía sin la previa presentación a las Juntas Provinciales de Abastos de la correspondiente factura, ajustada a los requisitos siguientes:

- a) Origen de la mercancía.
- b) Especificación de si procede de productor, mayorista o detallista.
- c) Precio; y
- d) Autorización de la Junta Provincial de Abastos del punto de origen.

2.^o Los comerciantes tendrán la obligación de tener expuesta al público la lista de precios, debidamente autorizada por la Junta Provincial de Abastos, de todos aquellos artículos que sean de subsistencias y uso o consumo indispensable.

3.^o A los Gobernadores civiles y Juntas Provinciales de Abastos incumbe la fiscalización y vigilancia de las obligaciones ineludibles establecidas en las cláusulas anteriores, así como el deber que tiene el comercio de librar factura al público o cliente de toda venta o transacción superior a 15 pesetas que verifique, con indicación del artículo, precio unitario, cantidad e importe. Será también derecho del comprador o cliente y obligación del comerciante entregar factura a aquél de su compra o servicio, siempre que su importe esté comprendido entre las cantidades de 4.⁹⁹ y 15 pesetas y el comprador o cliente la reclame.

4.^o Sólo se permitirá que una mercancía sea recar-

gada con un beneficio industrial de mayorista y uno de detallista, sin que bajo ningún concepto ni pretexto pueda aumentarse su número.

La simulación o desviación de esta norma se castigará simultáneamente con las sanciones de multas, comiso y privación de libertad.

Las Juntas Provinciales, sin perjuicio de las disposiciones sobre contribución industrial, no autorizarán facturas de venta entre mayoristas y detallistas que no cumplan esta condición, a no ser que el vendedor ceda parte de su beneficio industrial.

Se extremará la vigilancia de las normas anteriores respecto de los productos de la tierra (verduras, frutas y hortalizas) que se coticen en los mercados centrales, a fin de reducir el número de intermediarios al mínimo indispensable justificado por el desempeño de una función concreta y necesaria».

Las precitadas normas serán de rigurosa aplicación para los comerciantes interesados, debiendo ser cumplimentadas con toda escurpulosidad, ya que cualquier infracción que se observe motivará la adopción de las medidas coercitivas que se determinan en el párrafo 2.º del apartado 5.º de la Orden-circular trancrita.

Zaragoza, 8 de junio de 1938. — Segundo Año Triunfal.

El Gobernador-Presidente,
Francisco Planas de Tovar.

Núm. 2.919.

Junta Provincial de Abastos de Zaragoza

Al objeto de regularizar las operaciones de compra-venta del producto denominado alfalfa se hace constar que a partir de la fecha y hasta nueva orden la tasa para la nueva cosecha queda fijada de 10 a 12 pesetas los 100 kilogramos, según calidades y sin empacar, puesta en domicilio del comprador.

Ahora bien, si la alfalfa vendida fuese empacada, se incrementará el precio en los gastos que dicha operación represente.

Zaragoza, 8 de junio de 1938. — Segundo Año Triunfal.

El Gobernador civil,
Francisco Planas de Tovar.

SECCION TERCERA

Núm. 2.921.

Comisión Gestora de la Diputación Provincial de Zaragoza.

A los efectos de devolución de fianza depositada por el contratista D. José Moles Espada, para responder de la ejecución de las obras de construcción del camino vecinal número 705, denominado de Cuarte a la carretera de Zaragoza a Teruel, obras ya terminadas y liquidadas, en cumplimiento de acuerdo de esta Comisión Gestora de fecha de ayer, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del Pliego general de condiciones para la construcción de caminos vecinales y puentes económicos aprobado por R. D. de 22 de diciembre de 1911, se hace público en este periódico oficial para general conocimiento que durante el plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, pueden presentarse cuantas reclamaciones se estimen pertinentes en contra de

dicha devolución, por daños o perjuicios, deudas de jornales o materiales, indemnizaciones, etc.; advirtiéndose a los Alcaldes de los municipios en que radica la obra deberán remitir a esta Diputación Provincial certificaciones de las reclamaciones que existan, y significándoles que si dichas certificaciones no se reciben dentro del plazo de los treinta días se entenderá que no hay ninguna reclamación.

Zaragoza, 7 de junio de 1938. — Segundo Año Triunfal. — El Presidente, M. Allué Salvador. — El Secretario, Emilio Falcó.

SECCION CUARTA

Núm. 2.922.

Delegación de Hacienda de la provincia de Zaragoza.

Circular importante.

Dispone el art. 14 del Reglamento de la Hacienda municipal de 23 de agosto de 1924 que las obligaciones reconocidas y no satisfechas, y los derechos liquidados, sean comprendidos como «Resultas» en el capítulo y cuenta que se abra al presupuesto del nuevo ejercicio, previa liquidación que deberá practicarse dentro de los veinte días siguientes al término de aquéllos por el Interventor de fondos, o, en su defecto, por el Secretario del Ayuntamiento, sometiéndola a la aprobación de la Corporación municipal.

En su virtud, llamo la atención de los señores Alcaldes de esta provincia a fin de que, durante el mes en curso, remitan a esta Delegación de Hacienda un ejemplar de dicha liquidación, que ha de contraerse al ejercicio de 1937, acompañando relaciones de deudores y acreedores del municipio, así como la certificación del referido año de haber sido expuesta al público por el plazo reglamentario al objeto de reclamaciones, y aprobada por el Pleno del Ayuntamiento; advirtiéndoles que la demora en el cumplimiento de este importantísimo servicio dará lugar a la imposición de las sanciones consiguientes.

Zaragoza, 8 de junio de 1938. — Segundo Año Triunfal. — El Delegado de Hacienda, R. Peñarredonda.

SECCION QUINTA

Núm. 2.912.

Comisión de Mutilados y Heridos de Guerra de Calatayud.

Habiendo quedado constituida la Comisión de Mutilados y Heridos de Guerra por la Patria del partido de Calatayud, se pone en conocimiento de los mencionados mutilados y heridos, así como de las entidades oficiales y particulares y cuantas personas tengan derecho y obligaciones determinadas en el Reglamento provisional de dicho benemérito Cuerpo, para el ejercicio y cumplimiento de los mismos en relación con las funciones de dicha Comisión.

Calatayud, 7 de mayo de 1938. — Segundo Año Triunfal. — El Presidente de la Comisión, (ilegible).

Núm. 2.883.

Inspección Provincial de Sanidad

Se ha recibido en esta Inspección Provincial de Sanidad, para su publicación en el BOLETIN OFICIAL de la provincia, la siguiente Orden ministerial:

«Estado Español.—Ministerio del Interior.—Jefatura Nacional de Sanidad, A. P. D. núm. 1.601.—Por Orden ministerial de fecha 24 del corriente mes, comunicada a esta Jefatura Nacional de Sanidad, se dice lo siguiente: «Son numerosas las peticiones dirigidas a este Ministerio por distintos Colegios de Practicantes de Medicina solicitando una disposición que establezca la delimitación de las funciones propias de los citados profesionales y las que corresponden a la profesión de Enfermera.

Ha de tenerse en cuenta que, si bien ambas profesiones carecen de autonomía y responsabilidad en el orden científico, pues que por su carácter exclusivamente auxiliar han de hallarse en todo momento sujetas las actividades propias de cada una de ellas a la dirección técnica del Médico a cuyas órdenes inmediatas han de prestarse los servicios, no puede menos de reconocerse a favor de los Practicantes, no obstante sus limitadas funciones, según queda expuesto, que la preparación adquirida por los mismos cristaliza en un título expedido exclusivamente por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, o Departamento que haga sus veces, mediante el estudio de las materias de cultura general que integran los tres primeros cursos del grado de bachiller, y, ulteriormente, por otros dos cursos de ampliación en las Facultades de Medicina; hallándose organizado el ejercicio libre de esta profesión, aun sin salir del área limitada de sus atribuciones, mediante la obligatoriedad impuesta a estos profesionales de inscribirse en el Colegio correspondiente (R. O. 28 diciembre de 1928) y la de contribuir al propio tiempo a la Hacienda pública. Tales características no concurren en la profesión de Enfermera, la cual requiere una preparación más elemental adquirida mediante cursos de materias que más bien tienen como finalidad la de procurar el mayor perfeccionamiento posible en la asistencia de los enfermos en relación con aquellos cuidados propios del ambiente familiar y la adquisición de datos complementarios de las historias clínicas (recopilación de antecedentes patológicos, gráficas de temperatura, de pulso, de movimientos respiratorios, etc. etc.), sin que las personas encargadas de tales servicios se hallen autorizadas para ejercer libremente sus funciones como profesión ni contribuyan a la Hacienda pública, pues que no ostentan título alguno para la práctica de sus actividades con tal carácter, no hallándose, por tanto, organizado el ejercicio de aquéllas en forma de colegiación profesional, por todo lo cual no han salido las funciones que afectan a la profesión de que se trata de la jurisdicción de los Centros o Establecimientos oficiales. (Preventorios, Dispensarios, Sanatorios, Hospitales, Frenocomios, etc.)

Este Ministerio, por lo expuesto, ha tenido a bien disponer que en ningún caso será permitido el ejercicio libre de las prácticas propias de la carrera de Practicantes de Medicina sin el correspondiente título que autorice el ejercicio de las mismas. A este efecto han de contribuir con su colaboración y asistencia todos los ciudadanos, denunciando a las Autoridades los hechos de que tengan conocimiento en relación con el ejercicio de las actividades de referencia por aquellas personas que carezcan de título correspondiente.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos oportunos.

Dios guarde a V. E. la vida muchos años.

Burgos, 24 de mayo de 1938.—Segundo Año Triunfal.—P. D.: El Subsecretario, José Lorente».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y publicación en el BOLETIN OFICIAL de esa provincia, remitiendo a este alto Centro un ejemplar del número en que aparezca inserta la presente Orden, para la debida constancia y archivo en la Sección correspondiente de este Ministerio.

Dios guarde a V. S. la vida muchos años.

Valladolid, 25 de mayo de 1938.—Segundo Año Triunfal.—El Jefe Nacional de Sanidad, José A. Palanca». (Rubricado).

Zaragoza, 6 de junio de 1938.—Segundo Año Triunfal.—El Inspector provincial de Sanidad, José Viñés Ibarrola.

* * *

Se ha recibido en esta Inspección Provincial de Sanidad, para su publicación en el BOLETIN OFICIAL de la provincia, la siguiente Orden ministerial:

«Estado español.—Ministerio del Interior.—Jefatura Nacional de Sanidad, A. P. D. núm. 1.600.—Por Orden ministerial de fecha 24 del corriente mes, comunicada a esta Jefatura Nacional de Sanidad, se dice lo siguiente: «Con frecuencia llegan a este Departamento consultas en relación con la observancia y aplicación de la Orden dictada por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de 5 de octubre de 1934 con motivo de los casos, que no dajan de presentarse, de Médicos que ostentan al propio tiempo título de Practicante y se hallan ejerciendo simultáneamente ambas profesiones, la primera con carácter libre y la otra en cargo oficial adscrito a la Beneficencia provincial o municipal.

Con criterio muy plausible ha sido resuelta ya alguna de estas consultas, por la Jefatura Nacional de Sanidad, en el sentido de que a los fines de la Orden ministerial citada, y si bien en el art. 1.º del Estatuto de Colegios Oficiales de Practicantes de Medicina y Cirugía aprobado por R. O. de 28 de diciembre de 1929 se dispone que deberán pertenecer al Colegio respectivo con carácter obligatorio todos los Practicantes que ejerzan la profesión en el territorio de la provincia correspondiente, ha de entenderse que tal obligación sólo puede referirse en cuanto a las funciones profesionales de carácter libre y en manera alguna en relación con el ejercicio en cargos oficiales. Y es por esto que, dando la debida interpretación a los preceptos contenidos en la Orden ministerial de 5 de octubre de 1934 aludida, no puede admitirse que un Médico que al propio tiempo ostenta título de Practicante o de Enfermero ejerza simultáneamente dos de las citadas profesiones con carácter oficial una y la otra libremente, toda vez que esta simultaneidad es la que precisamente se prohíbe por las disposiciones de la repetida Orden del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de 5 de octubre de 1934, y es precisamente la aclaración contenida en el párrafo anterior la que ha inducido al Colegio Médico de Granada a dirigirse a aquella Inspección Provincial de Sanidad exponiendo el caso de tres señores Médicos de la capital que, en relación con la materia de que se trata, se han dirigido a su vez a la expresada organización profesional con motivo de desempeñar dos de ellos plaza de Practicante en la Beneficencia provincial y el tercero en la Beneficencia municipal, elevándose copia del escrito del citado Colegio por la expresada Inspección Provincial de Sanidad a este alto Centro para la resolución procedente.

Exponen los interesados que no se hallan afectados por las disposiciones de tan repetida Orden ministerial de 5 de octubre de 1934 y que pueden por tanto, según su personal criterio, ejercer simultáneamente la profesión de Médicos con carácter libre y la de Practicante en el cargo oficial que respectivamente ostentan, aduciendo uno de los interesados que, en virtud de Orden del mismo Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de 22 de junio de 1935 y como aclaración solicitada a la Orden del propio departamento tantas veces citada de 5 de octubre de 1934, se dispone que se entienda que la Orden aludida es solamente para los que simultanean las dos profesiones en cargos oficiales y perciben sus remuneraciones de los presupuestos del Estado, Provincia o Municipio; apoyándose en la misma disposición los otros dos, que insisten en que puedan ejercer al mismo tiempo la profesión de Médico libremente y con carácter oficial la de Practicante, manifestando además uno de los que prestan servicio de Practicante en la Beneficencia provincial que la Diputación de Granada no ha encontrado incompatibilidad, al extremo de que ha sido habilitado por dicha Corporación desde febrero de 1937 para ocupar una plaza interina de Médico honorario con la percepción de haberes como tal Practicante.

La Orden primitivamente dictada en 14 de septiembre de 1934 por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en relación con la materia de que se trata autorizaba a los Médicos para adquirir títulos de Practicante o Enfermero y ejercer estas profesiones auxiliares de la Medicina, quedando exentos de toda prueba de examen o aptitud. Y es evidente que si bien el expresado Departamento ministerial obró dentro del área de sus facultades al establecer las condiciones necesarias para la adquisición del título de Practicante o Enfermero, pues que sólo a tal Departamento corresponde determinar las disciplinas que han de integrar los planes de enseñanza de las distintas carreras universi-

tarias, como igualmente los requisitos necesarios para llegar a la obtención del correspondiente título, no lo es menos que la facultad de condicionar y reglamentar el ejercicio libre de las profesiones de referencia, una vez en posesión del título correspondiente que acredita la necesaria capacidad y competencia, así como en relación con cargos afectos a la Administración provincial y municipal para los que sea necesario alguno de los títulos de que queda hecha mención, corresponde exclusivamente a este Ministerio, del cual dependen de una manera totalitaria y directa aquellas jurisdicciones.

Este Ministerio, en armonía con lo que antecede, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

1.º Que la obligación impuesta a Médicos y Practicantes de pertenecer al Colegio respectivo en virtud de las disposiciones contenidas en los Estatutos de los Colegios de ambas profesiones (R. D. de 27 de enero de 1930 y Real Decreto de 28 de diciembre de 1927) solamente afecta a aquellos casos en que los interesados se dediquen al ejercicio libre de la profesión respectiva, no afectando tal obligación en cuanto al ejercicio en cargo de carácter oficial.

2.º Queda prohibido el ejercicio simultáneo de dos profesiones de las citadas anteriormente (Médico, Practicante y Enfermero), cualquiera que sea la modalidad del ejercicio profesional (libremente o en cargo oficial). Se exceptúan únicamente aquellos casos en que los Médicos de Asistencia Pública Domiciliaria tengan a su cargo las funciones propias de las plazas de Practicantes durante la interinidad de éstas en el propio Ayuntamiento, mediante el oportuno nombramiento, a cuyo efecto y por tratarse de una situación circunstancial y transitoria no es necesario que ostenten título de Practicante.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y traslado a las Inspecciones Provinciales de Sanidad y Jefatura de Sanidad Civil de Ceuta y Melilla, para su publicación en el «Boletín Oficial» respectivo a los efectos oportunos.

Dios guarde a V. E. la vida muchos años.
Burgos, 24 de mayo de 1938. — Segundo Año Triunfal. — P. D.: El Subsecretario, José Lorente.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y publicación en el «Boletín Oficial» de esa provincia, remitiendo a este alto Centro un ejemplar del número en que aparece inserta la presente Orden para la debida constancia y archivo en la Sección correspondiente de este Ministerio.
Dios guarde a V. S. la vida muchos años.

Valladolid, 25 de mayo de 1938. Segundo Año Triunfal. — El Jefe Nacional de Sanidad, José A. Palanca.

Zaragoza, 6 de junio de 1938. — Segundo Año Triunfal. — El Inspector provincial de Sanidad, José Viñés Ibarrola.

Núm. 2.862.

Comisión Provincial de Incautaciones.

De conformidad con lo previsto en el artículo 6.º del Decreto-ley de 10 de enero de 1937, he mandado instruir expediente sobre declaración de responsabilidad civil contra

Donato Ejea Morlanes, vecino de Embid de Ariza. (Expte. 4.919).

Jacinto Gil López, vecino de id. (Expte. 4.920).

Angel Gil Monreal, vecino de id. (Expte. 4.921).

Pedro Horna Bailón vecino de id. (Expte. 4.922).

Gregorio Latorre Esteban, vecino de id. (Expte. 4.923).

Daríá Lázaro Gómez, vecina de id. (Expte. 4.924).

Eusebio Valentín Esteban, vecino de id. (Expte. 4.925).

Felipe Villarreal Muñoz, vecino de Embid de Ariza. (Expte. 4.926).

habiendo nombrado Juez instructor de los expedientes al del partido de Ateca.

Zaragoza, 1 de junio de 1938. — Segundo Año Triunfal. — El Gobernador civil, Presidente de la Comisión: P. D., (ilegible).

Núm. 2.862.

De conformidad con lo previsto en el artículo 6.º del Decreto-ley de 10 de enero de 1937, he mandado instruir expediente sobre declaración de responsabilidad civil contra

Alberto Andreoloti Alcázar, vecino de Sisamón. (Expte. 4.927).

Agustín Aragón Escuder, vecino de id. (Expte. 4.928).

Pedro García Cebolla, vecino de id. (Expte. 4.929).

Zacarías García Herrero, vecino de id. (Expte. 4.930).

Vicente Gutiérrez Martínez, vecino de id. (Expte. 4.931).

Domingo Hernández Mendoza, vecino de id. (Expte. 4.932).

Pedro Hernández Mendoza, vecino de id. (Expte. 4.933).

José Marco Espeja, vecino de id. (Expte. 4.934).

Mariano Utrilla Hernández, vecino de id. (Expte. 4.935).

Pedro Utrilla Hernández, vecino de id. (Expte. 4.936).

Teodoro Utrilla Hernández, vecino de id. (Expte. 4.937).

Valentín Yagüe Gutiérrez, vecino de id. (Expte. 4.938).

habiendo nombrado Juez instructor de los expedientes al del partido de Ateca.

Zaragoza, 2 de junio de 1938. — Segundo Año Triunfal. — El Gobernador civil, Presidente de la Comisión: P. D., (ilegible).

SECCION SEXTA

BORJA

Núm. 2.910.

El día 25 del actual, sábado, y hora de las doce, tendrá lugar en el salón de actos de esta Casa Consistorial la subasta primera para la venta de una máquina aventadora con un motor, incautados por la Comisión Central al Casino de Izquierda Republicana, por el tipo en alza de 1.350 pesetas.

Los bienes incautados objeto de esta subasta, la cual será por pujas a la liana, según tiene acordado esta Alcaldía en el expediente que al efecto instruye, se hallan en poder del depositario D. Francisco Castellot Vicioso, habitante en esta ciudad, Canales, 4, quien los exhibirá a cuantas personas les pudiese interesar su adquisición.

Borja, 8 de junio de 1938. — Segundo Año Triunfal. — El Alcalde ejerciente, Santiago Viamonte.

TAUSTE

Núm. 2.907.

Hasta el 15 del corriente mes se admitirán en la Secretaría municipal las alteraciones que hayan sufrido

los propietarios de fincas urbanas, presentando los documentos que las justifiquen y cartas de pago del impuesto de derechos reales.

Tauste a 7 de junio de 1938.—Segundo Año Triunfal.—El Alcalde, Joaquín López.

SECCION SEPTIMA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Requisitorias.

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incurrir en las demás responsabilidades legales, de no presentarse los procesados que a continuación se expresan, en el plazo que se les fija, a contar desde el día de la publicación del anuncio en este periódico oficial y ante el Juez o Tribunal que se señala, se les cita, llama y emplaza, encargándose a todas las Autoridades y Agentes de la Policía judicial procedan a la busca, captura y conducción de aquéllos, poniéndolos a disposición de dicho Juez o Tribunal, con arreglo a los artículos 512 y 388 de la ley de Enjuiciamiento criminal, 664 de la ley de Enjuiciamiento militar de Marina.

Núm. 2.911.

GRACIA MAYORAL (Antonio), de 22 años, hijo de Angel y Pilar, soltero, encuadrador, natural de Samper de Calanda (Teruel), y sin domicilio, con residencia en Bilbao, calle Cortes, 24, y

CARRERA GAVAS (Justo-José), de 24 años, hijo de José, y Aurora, soltero, camarero, natural de Huesca y vecino de Nueno, procesados en la causa número 78 de 1936 sobre tentativa de robo, cuyo actual paradero se desconoce, comparecerán en el término de diez días ante el Juzgado de instrucción de Miranda de Ebro, al objeto de constituirse en prisión decretada por auto de 1.º de junio actual en referida causa.

Núm. 2.929.

PONZ CATALAN (Miguel), de 30 años, estado casado, de profesión u oficio chofer, hijo de Miguel y de Joaquina, natural de Alcañiz, domiciliado últimamente en Alcañiz (Espejo, núm. 10), procesado por la causa núm. 283 de 1935 sobre estafa, comparecerá dentro del término de diez días ante el Juzgado de instrucción número 1 de Zaragoza, Secretaría del Sr. Barsala, para constituirse en prisión decretada por la Superioridad en el ramo de situación dimanante del sumario indicado.

Núm. 2.929.

PONZ LAHOZ (Julián), de 33 años, estado casado, de profesión u oficio chofer, hijo de José y de Manuela, natural de Alcañiz, domiciliado últimamente en Alcañiz (García Hernández, 34), procesado por la causa núm. 283 de 1935 sobre estafa, comparecerá dentro del término de diez días ante el Juzgado de instrucción número 1 de Zaragoza, Secretaría del Sr. Barsala, para constituirse en prisión decretada por la Superioridad en la pieza de situación dimanante del sumario indicado.

Juzgados de primera instancia.

Núm. 2.895.

JUZGADO NUM. 2.

Cédula de citación.

En virtud de lo acordado por el señor Juez de instrucción del Juzgado núm. 2 de esta ciudad en sumario que se instruye con el núm. 63 de 1938, sobre hurto de energía eléctrica, se cita por medio de la presente

cédula a Manuel Ferrando Tena, y su esposa, que se ignora como se llama, los que tuvieron su domicilio en la calle del Cerezo, núm. 34, 2.º izquierda y actualmente se ignora, así como su paradero, a fin de que dentro del término de cinco días comparezcan ante dicho Juzgado al objeto de recibirles declaración en sumario mencionado, con apercibimiento que de no comparecer les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Y para que sirva de citación en forma, expido la presente que firmo en Zaragoza a siete de junio de mil novecientos treinta y ocho.—Segundo Año Triunfal.—El Secretario: P. H., Mariano Torrijos.

Núm. 2.882.

JUZGADO NUM. 3

D. Pablo de Pablo Mateos, Juez de primera instancia del Juzgado número 3 de Zaragoza;

Hago saber: Que para hacer efectiva responsabilidad civil exigida a Tomás Bueria Laborda, en expediente seguido al mismo por orden de la Comisión Provincial de Incautaciones, se sacan a la venta en pública y primera subasta, que tendrá lugar en la sala-audiencia de este Juzgado el día 6 de julio próximo, a las once, los bienes siguientes:

Un campo regadío sito en Alfajarín, partida de «La Canal», de un cahiz y 4 hanegas, que linda: al Norte, con viuda de Miguel Serena; al Sur, «Prado de la Salina»; al Este, con Hermenegildo Garvi, y al Oeste, con Francisca García. Valorado en mil doscientas pesetas.

Otro campo de regadío, en Alfajarín, partida «Raso del Soto», de cabida 6 hanegas, que linda: al Norte, con riego; al Sur, con camino; al Este, con Felisa Aguirán, y al Oeste, con camino. Valorado en dos mil cien pesetas.

Mitad de una casa indivisa sita en la calle del General Mola, señalada con el número 14, en el pueblo de Alfajarín, consta de un piso sobre el firme, con cuadra y pajar en el corral; linda: por la derecha entrando, con otra de Ana Peña; por la izquierda, con otra de Camilo Ariño, y por el fondo, con calle del General Monasterio. Valorada en mil pesetas.

Una potra de dos años aproximadamente. Tasada en setecientas pesetas.

Para tomar parte en dicha subasta deberán los licitadores consignar previamente en la mesa del Juzgado el 10 por 100 de la tasación y exhibir su cédula personal, sin cuyos requisitos no serán admitidos, pudiendo hacerse en calidad de ceder a un tercero, sin que sean admisibles posturas que no cubran las dos terceras partes de la tasación, hallándose el semoviente relacionado en poder del depositario Alejandro Pallás, vecino de Alfajarín; que no existen títulos de propiedad de los inmuebles de referencia, siendo de cargo del rematante el proporcionárselos y que las cargas y gravámenes anteriores o preferentes, si los hubiere, al crédito que se trata de hacer efectivo quedarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Dado en Zaragoza a seis de junio de mil novecientos treinta y ocho.—Segundo Año Triunfal.—Pablo de Pablo Mateos.—El Secretario, Vicente Lizandra.

Núm. 2.897.

JUZGADO NUM. 3

D. Pablo de Pablo Mateos, Juez de primera instancia del Juzgado número 3 de Zaragoza;

Hago saber: Que en juicio de menor cuantía promovido por el Banco Español de Crédito contra D. Faustino Clemente Alda, en reclamación de cantidad, se ha dictado con esta fecha la siguiente

«*Providencia:* Juez Sr. de Pablo.—Zaragoza, 7 de junio de 1938.—El anterior escrito únase a las diligencias en que se comparece; y habiéndose promovido juicio declarativo de menor cuantía por el Banco Español de Crédito, dése a la demanda formulada el trámite establecido para dicha clase de juicios y de la misma se confiere traslado con emplazamiento al demandado D. Faustino Clemente Alda, para que dentro del término de nueve días comparezca en estos autos, cuyo emplazamiento le será hecho en la forma prevenida para las notificaciones y por su ignorado paradero mediante edicto inserto en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia y fijación de otro en estrados del Juzgado; al primer otrosí, a su tiempo se acordará; y al segundo, llévase testimonio del mismo a la pieza separada de embargo preventivo para resolver en ella lo procedente.—Lo manda y firma S. S.^a doy fe.—Pablo de Pablo.—Ante mí, Vicente Lizandra».

Y para que sirva de notificación y emplazamiento en forma a dicho demandado D. Faustino Clemente Alda, se expide el presente en Zaragoza a siete de junio de mil novecientos treinta y ocho.—Segundo Año Triunfal.—Pablo de Pablo Mateos.—El Secretario, Vicente Lizandra.

Núm. 2.891.

BORJA

Cédula de emplazamiento.

En el incidente de pobreza suscitado en este Juzgado por el Procurador D. Rodolfo Aráus Castro, en nombre de Manuel Tejero Aranda, contra los herederos de Manuel Tejero Urzay y otros, se ha dictado la siguiente

«*Providencia:* Juez Sr. Sánchez.—Borja a 4 de junio de 1938. Dada cuenta y dando curso a la demanda incidental de pobreza instada por el Procurador D. Rodolfo Aráus Castro, en nombre de Manuel Tejero Aranda, se confiere traslado de ella a los demandados viuda y herederos de Manuel Tejero Urzay, Luis Lahuerta, Cipriano Pellicer, vecinos éstos de Borja; Narciso Moros, vecino de Maleján, al Ministerio fiscal y al señor Liquidador del impuesto de derechos reales de este partido en la representación del Abogado del Estado, a los que se les emplazará para que en término de nueve días comparezcan a contestarla, bajo apercibimiento a los primeros de que en caso contrario se sustanciará sólo con la representación del Estado; y para que tenga lugar el emplazamiento de los herederos de Manuel Tejero Urzay, insértense edictos en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y estrados de este Juzgado, y en cuanto a Narciso Moros, líbrese carta-orden al Juzgado municipal de Maleján. En cuanto al recibimiento a prueba se tiene por hecha dicha petición y a su tiempo se acordará lo procedente.—Proveído por el señor Juez ejerciente y firma, doy fe.—Santiago Sánchez.—Ante mí, Carmelo Molíns.» (Rubricado).

Y para que tenga lugar el emplazamiento de los herederos de Manuel Tejero Urzay, se expide la presente, previniéndoles que en término de nueve días comparezcan a contestar la demanda, con la prevención de que no haciéndolo se sustanciará sólo con la representación del Estado, y haciéndoles saber que las copias simples presentadas están a su disposición en Secretaría.

Dado en Borja a cuatro de junio de mil novecientos treinta y ocho.—Segundo Año Triunfal.—El Secretario judicial, Carmelo Molíns.

Núm. 2.914.

SOS DEL REY CATOLICO

D. Fernando Lanzón y Surroca, Juez de primera instancia de la villa de Sos del Rey Católico y su partido;

Hago saber: Que, según lo acordado en el expediente núm. 2.100 seguido por delegación de la Comisión Provincial de Incautaciones de Zaragoza, he acordado sacar a la venta en pública subasta por primera vez y por el tipo de tasación los siguientes cereales depositados en poder de Antonio Giménez, vecino de Pintano:

1.144 kilogramos de ordio, a 0'40 pesetas kilo, 457'60.

202 kilogramos de avena, a 0'38 pesetas kilo, 76'76

Se ha señalado para que tenga lugar el remate el día 17 de los corrientes y hora de las diez de su mañana en la sala-audiencia de este Juzgado, haciéndose para el mismo las advertencias siguientes:

Que para tomar parte en la subasta deberán los licitadores consignar el 10 por 100 por lo menos del valor de los bienes que se subastan y exhibir su cédula personal, siendo preferido el que posture por la totalidad de todos ellos.

Que no se admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes del avalúo, pudiendo hacerse el remate a calidad de cederlo a un tercero.

Dado en Sos del Rey Católico a seis de junio de mil novecientos treinta y ocho.—Segundo Año Triunfal.—Fernando Lanzón y Surroca.—El Secretario, Elías Gervás.

PARTE NO OFICIAL

Núm. 2.916.

Banco Zaragozano

Habiendo sufrido extravío la libreta de Caja de Ahorros número 672, expedida por nuestra Sucursal de Teruel el día 29 de marzo de 1937 a favor de D. José Formentín Formentín, se anuncia para que en caso de que alguna persona se crea con derecho se sirva presentarse en estas oficinas, Coso, 47 y 49.

Trascurridos quince días a partir de la publicación de este anuncio se considerará anulada la citada libreta, expidiéndose un duplicado de la misma, quedando este Banco exento de toda responsabilidad.

Zaragoza, 8 de junio de 1938.—Segundo Año Triunfal.—El Consejero-Secretario, Salustiano Lon Laga.

Núm. 2.931.

Sindicato de Riegos de Garfilán, de Torres de Berrellén

Se convoca a Junta general ordinaria a todos los interesados en el Sindicato de Riegos de Garfilán, de Torres de Berrellén, que se celebrará el día 13 de junio, a las dieciséis en primera convocatoria y a las diecisiete en segunda, en el salón de sesiones de este Sindicato, para tratar del siguiente orden del día:

1.º Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

2.º Examen y aprobación de las cuentas de gastos de 1937.

3.º Acordar lo que convenga para el mejor aprovechamiento de las aguas y distribución de riegos en el año actual; y

4.º Ruegos, preguntas y proposiciones.

Lo que se anuncia para conocimiento de los interesados.

Torres de Berrellén a 6 de junio de 1938.—Segundo Año Triunfal.—El Presidente, Abelardo Gómez.